

Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En causa RUC N°2200878062-9, RIT N°220-2023 del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de treinta de octubre del año dos mil veintitrés, se condenó a la acusada **Rosario del Carmen Muñoz Quintana**, a sufrir **dos** penas de **trescientos y un día**, de presidio menor en su grado mínimo, y dos multas de una unidad tributaria mensual, además de la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, sin costas, por su responsabilidad en calidad de autora de **dos** delitos consumados de hurto simple, previsto en el artículo 446 N°3 en relación con el artículo 432, ambos del Código Penal, cometidos el seis de septiembre de dos mil veintidós, en la comuna de Ñuñoa.

En contra de esa decisión la sentenciada interpuso recurso de nulidad, el que fue conocido en audiencia pública celebrada el día siete de marzo del año en curso, notificándose a los intervinientes la fecha de lectura del fallo para el día fijado, según consta en el acta levantada en su oportunidad.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la defensa de la encartada invocó como único motivo de nulidad, aquel previsto en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 83 y 85 del citado estatuto jurídico y 19 N°3 inciso sexto de la Constitución Política del Estado. Es así como alega vulnerado su derecho a ser juzgada en un proceso racional y justo, centrando la objeción en la adopción de un procedimiento policial reñido con la ley a causa del despliegue de un control de identidad investigativo desprovisto del indicio necesario para su implementación.



Finalmente, cabe precisar que, en la vista del presente arbitrio de invalidez, la defensa hizo expresa renuncia a la prueba destinada a acreditar la causal, señalando que se estaría al mérito de las declaraciones transcritas en el libelo recursivo.

SEGUNDO: Que, como se dijo, la objeción de nulidad se sostiene en que Carabineros de Chile controló la identidad de la imputada con prescindencia del indicio legalmente exigido, viciando y contaminando de ilicitud todo el procedimiento desarrollado. Sobre el particular, se aduce que el control de identidad se basó exclusivamente en una denuncia de un transeúnte dando cuenta que una determinada mujer, apostada en la vía pública, ofrecía en venta prendas de vestir con etiqueta, lo que, en concepto de la recurrente, tal información solo es indicativa de una falta administrativa vinculada al ejercicio de comercio ambulante. A raíz de ello, la policía estaba impedida de concretar el procedimiento reglado en el artículo 85 del Código Procesal Penal.

Como corolario a lo expuesto *supra*, se solicitó acoger la causal de nulidad entablada y en su mérito anular la sentencia impugnada y el juicio que le precedió, ordenando la celebración de un nuevo juicio oral con prescindencia de toda la prueba ofrecida en el auto de apertura de juicio oral.

TERCERO: Que, en el considerando octavo de la sentencia impugnada los sentenciadores del grado dieron por establecido el siguiente sustrato fáctico: *“El día 6 de septiembre de 2022, alrededor de las 11:30 horas, en avenida Irarrázaval, intersección con avenida Pedro de Valdivia, comuna de Ñuñoa, **ROSARIO DEL CARMEN MUÑOZ QUINTANA**, ingresó a la tienda NIKE, ubicada en avenida Irarrázaval N°2801, comuna de Ñuñoa, sustrayendo con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, 2 chaquetas tipo cortavientos, valuadas en la suma de \$85.428, sin cancelar su valor. También, ingresó a la tienda ADIDAS,*



ubicada en avenida Irarrázaval N°2570, comuna de Ñuñoa, desde donde sustrajo, con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, 3 camisetas de equipos deportivos y un cortaviento de color negro, especies valuadas en la suma de \$200.000, sin cancelar su valor, siendo posteriormente detenida por carabineros, portando dichas especies, al interior de su bolso”.

Estos hechos fueron calificados como constitutivos de dos delitos consumados de hurto simple, ilícito previsto y sancionado en el artículo 446 N°3, en relación con el artículo 432, ambos del Código Penal.

CUARTO: Que, para un adecuado análisis de la protesta levantada, es recomendable traer a colación ciertos lineamientos que esta Corte Suprema ha fijado en el tiempo. Es así, como se ha sostenido en diversos pronunciamientos que si bien es efectivo que la Constitución Política de la República entrega al Ministerio Público la función de dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, regla que repite su Ley Orgánica Constitucional y múltiples instrucciones de parte de la autoridad superior de aquél, el Código Procesal Penal regula las funciones de la policía con relación a la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación, conciliando su eficacia con el respeto a los derechos de las personas. Para dicho efecto el artículo 83 del texto citado, compele a las agencias de persecución penal a practicar la detención sólo en casos de flagrancia, situación que efectivamente puede ocurrir con ocasión de un control de identidad investigativo.

QUINTO: Que, también se ha declarado sistemáticamente que, más allá de la adscripción o no que tenga esta Corte en torno a la puesta en marcha del control de identidad, (hipótesis que, por lo demás, implicaría una improcedente revisión en segundo grado de tal proceder), el aspecto trascendental a despejar



estriba en constatar la correcta construcción del indicio a partir de las circunstancias objetivas que arroja el caso concreto. Sólo así, se justificaría razonablemente la temporal restricción de la libertad personal del ciudadano que es sometido al control y, con ello, descartar el uso arbitrario, antojadizo o discriminatorio de esta herramienta legal.

SEXTO: Que, en el caso *sub lite*, el punto neurálgico de la discusión trasuntó en desentrañar si el procedimiento policial estuvo precedido del indicio exigido por el legislador para proceder conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal. Y lo cierto es que, al tenor del caudal informativo aportado al juicio, plasmado latamente en el motivo noveno del fallo en revisión, se extraen elementos precisos y suficientes para justificar el uso de la herramienta, tal como lo argumentó el tribunal de la instancia al rechazar la pretensión exculpatoria deducida por la defensa. En efecto, en el considerando décimo de la resolución impugnada, las juezas del grado ponderaron diversos antecedentes objetivos, cuya asociación permitió correctamente estructurar el indicio que habilitaba el despliegue de un control de identidad investigativo.

Así, primeramente, se tuvo en cuenta el contenido de la denuncia efectuada por un transeúnte, quien alertó a los agentes policiales respecto a que una determinada mujer ofrecía, en la vía pública, indumentaria de vestir con etiqueta. Pues bien, en lo tocante a esta información, la defensa postuló su reconducción a una falta administrativa relacionada con el comercio ambulante, de suerte tal que resultaba inidónea para estructurar el indicio inherente a esta clase de control de identidad.

Con todo, como se adelantó, el *a quo* discrepó de tal apreciación asentando que el contenido de la denuncia daba luces de un potencial ilícito de receptación.



Esto, dado que, para las juezas del grado, la importancia de la denuncia no radicó en el hecho de la “venta”, la que considerada en solitario podría llegar a constituir una contravención administrativa, sino que lo realmente importante fue la alusión hecha a las vestimentas “con etiqueta”, pues en ella va envuelta la idea de posesión o tenencia de especies robadas o sustraídas ilegítimamente (considerando décimo).

Entonces, al tenor de lo recién explicitado, resultaría impropio reducir o editar el contenido de la denuncia al simple ejercicio del comercio ambulante, toda vez que ello implicaría lisa y llanamente desnaturalizarla en cuanto a su real alcance y significación. Por el contrario, la información debe ser procesada en su globalidad y, en ese sentido, a pesar de los intentos de la defensa por desmarcarse de la mención vestimentas “con etiqueta”, lo cierto es que tal aserto resulta trascendental al instante de aquilatar y justificar el actuar policial. En otros términos, no es que simplemente se le informara a la policía que se estaba realizando venta ilegal en la vía pública sino que es precisamente el agregado final de la denuncia lo que provocó el traspaso de los contornos de un informe de una simple infracción administrativa hacia la potencial comisión de un delito flagrante de receptación, en orden a que aparecía haber productos robados nuevos en la calle, esto es, etiquetados, de modo que no resulta efectivo que aquélla haya estado desprovista de elementos de connotación penal.

SEPTIMO: Que, a lo anterior debe agregarse, de acuerdo a lo consignado en el razonamiento noveno de la sentencia atacada, que la advertencia entregada por el transeúnte fue clara en torno a la identificación de la persona denunciada, al ofrecer características precisas tanto de vestimentas como de ciertos aspectos físicos de ésta, factores todos que, unidos a la estrecha distancia que separaba al



personal policial de la persona sindicada, posibilitó que aquéllos pudiesen inmediatamente consumir la asociación, identificando a la mujer denunciada.

OCTAVO: Que, en ese sentido, una vez despejada la existencia de una *notitia criminis* concreta y habiendo sido rápidamente identificada la persona objeto de ésta, pasa a cobrar trascendencia la secuencia fáctica inmediatamente siguiente, por cuanto a través de ella se termina por validar el control de identidad investigativo realizado por Carabineros de Chile. En efecto, luego de la interacción generada entre los agentes policiales con el transeúnte, aquéllos se dirigieron al lugar en que estaba apostada la denunciada, instante en que ésta, al ver la presencia policial, abre una cartera y comenzó raudamente a guardar las prendas al interior de ésta, acción que fue presenciada directamente por los funcionarios Parra Pierola y Martínez Sánchez, según se establece en el motivo noveno del fallo recurrido. Sobre este punto, cabe resaltar que la actividad ejecutada por la imputada no sólo fue vista por la policía a corta distancia, sino que además la reacción inmediata de guardar las vestimentas dentro de su bolso, al percatarse de la presencia de Carabineros, emergió como un antecedente indudablemente objetivo y que vino a reforzar a cabalidad el contenido de la denuncia previamente recibida, cerrando con ello el proceso de construcción del indicio habilitante para proceder conforme lo dispuesto en el artículo 85 del Código Procesal Penal, tal como se expresa en el razonamiento décimo del fallo revisado.

Así las cosas, conforme a los estándares establecidos por esta Corte Suprema en materia de denuncias anónimas, su eficacia está condicionada a la existencia de datos certeros que objetivamente respalden el hecho delictivo del que da cuenta (V.gr. Rol Ingreso Corte N°30.582-2020), parámetro que, en el caso en examen, se cumplió satisfactoriamente según todo lo consignado



precedentemente, transformando a la denuncia anónima en un antecedente serio y verosímil (en esa línea, Rol Ingreso Corte N°41.165-2019).

NOVENO: Que, como colofón a lo manifestado *supra*, esta Corte Suprema no observa irregularidad alguna en la adopción del control de identidad ejecutado respecto de la encartada, quedando, por tanto, disipado el principal cuestionamiento jurídico que sostenía la única causal de invalidez.

Luego, cabe decir que las primeras diligencias materializadas con posterioridad por Carabineros de Chile, fueron el resultado directo de los hallazgos descubiertos a partir de la citada fiscalización policial, las que, correctamente, fueron interpretadas por las sentenciadoras del grado como el ejercicio de las facultades legamente conferidas en la letra d) del artículo 83 del código procedimental. En efecto, una vez revisado el bolso o cartera que portaba la controlada, quedó en evidencia no solo la efectividad de tratarse de prendas de vestir adosadas con su respectiva etiqueta -como indicó la persona denunciante- sino que, además, el bolso en que estaban ocultas correspondía a lo que usualmente es conocido como una “cartera biónica”, esto es, aquella forrada en su interior con papel aluminio con el propósito de burlar los sistemas de seguridad instalados por la empresa dueña de los productos y así posibilitar la sustracción sin riesgo de ser descubierta.

Es por esa razón que, fruto de la evidencia obtenida en el control de identidad, la sentencia recurrida acertadamente dio por establecido, en su razonamiento décimo, un cambio de escenario. Lo anterior, en atención a que un procedimiento iniciado con motivo de un control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, lisa y llanamente mutó a un delito flagrante de receptación de especies, cuestión que habilitaba a la policía para ejercer autónomamente las



atribuciones previstas en las letras b) y d) del artículo 83 del citado código, en la especie, proceder a la detención de la encartada como concurrir a las tiendas Nike y Adidas (emplazadas a menos de dos metros del lugar de fiscalización).

Asimismo, es dable decir que la conclusión previamente descrita no se ve alterada de modo alguno por el cambio de calificación jurídica del ilícito a hurto, toda vez que la información relativa a que la encausada fue quien, en definitiva, se apropió de las especies, se obtuvo con posterioridad a la revisión de la cartera de aquélla. Sin embargo, en uno u otro caso, siempre el escenario se mantuvo dentro de los contornos de la comisión de un hecho delictual atentatorio contra el bien jurídico propiedad, motivo por el que la policía estuvo siempre facultada para obrar de la forma en que lo hizo.

DECIMO: Que, en esa ilación, una vez revisadas cada una de las fases que conformaron la arquitectura del procedimiento policial incoado en la presente causa, sólo queda constatar su estricta sujeción a la normativa aplicable y vigente para este tipo de actuaciones.

UNDECIMO: Que, en síntesis, al no haber obrado ilegalmente al controlar la identidad de la imputada Muñoz Quintana, tampoco el órgano jurisdiccional ha cometido infracción alguna al basar su convicción de condena en la prueba obtenida a partir de la cuestionada diligencia policial, factor que conducirá al rechazo del recurso de nulidad entablado.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 83, 85 y 373 letra a), todos del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad promovido por la defensa del condenado **Rosario del Carmen Muñoz Quintana**, en contra de la sentencia de treinta de octubre del año dos mil veintitrés, dictada en la causa RUC N°2200878062-9, RIT N°220-2023, del Tercer



Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y del juicio oral que le antecedió, los que, por consiguiente, no son nulos.

Acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Valderrama, quien fue del parecer de acoger el recurso de nulidad interpuesto a favor Muñoz Quintana y, en mérito de ello, anular la sentencia definitiva como el juicio oral que le precedió, disponiendo la celebración de un nuevo juicio ante tribunal no inhabilitado, teniendo presente para ello las siguientes consideraciones:

1°) Que, la información transmitida por el transeúnte a Carabineros de Chile solo dio cuenta de una conducta inocua desde el ámbito penal, la que, a lo sumo, tendría alguna repercusión en el ámbito administrativo a causa del ejercicio de comercio ambulante.

2°) Que, bajo ese entendimiento, la denuncia recibida no habilitaba a los agentes policiales para controlar la identidad de la acusada, en atención a que no disponían de un antecedente de connotación penal que los facultara para actuar autónomamente, a pesar de lo cual, igualmente decidieron llevar a cabo la fiscalización, infringiendo lo dispuesto en el artículo 85 del Código Procesal Penal.

3°) Que, así las cosas, en concepto de quien disiente el procedimiento policial desplegado adoleció de un vicio, con evidente sustancialidad en lo resuelto en definitiva, razón por la que correspondía declarar su nulidad.

Redacción del fallo a cargo del abogado integrante Sr. Gandulfo.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°244.514-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. Jessica González T., y los Abogados Integrantes Sra. Pia Tavorari G. y Sr. Eduardo Gandulfo R.





En Santiago, a veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

